

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Veracruz por el C. Vicente Simancas, apoderado de los herederos de D. J. Antonio Abrego, contra el juez 2º de 1ª instancia de Orizaba, por las diligencias practicadas en ejecucion de la sentencia de 3ª instancia pronunciada por el II. tribunal superior de justicia del Estado, en un juicio promovido por Abrego contra D. Felipe de Jesus Galicia.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal sustituto dice: que los herederos de D. José Antonio Abrego de Orizaba, por medio de su poder ha promovido este juicio de amparo y proteccion contra providencias del juzgado de 1ª instancia de aquel Canton que han tenido por objeto ejecutar la sentencia superior de 3ª instancia pronunciada en el juicio intentado por el mismo Sr. Abrego contra D. Felipe de Jesus Galicia, sobre nulidad del ejecutivo que este le habia promovido en la época del llamado Imperio, por violar dichas providencias las garantías que le concede la Constitucion federal en los artículos que citan los quejosos en su ocurno de fojas 8.

Evacuando el informe correspondiente, despues de haberse dictado el auto de suspension de los actos reclamados, conforme á la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, que marca el procedimiento, se ha servido el juzgado pasarle las actuaciones en traslado para que pida lo correspondiente en el caso.

Por sus constancias se advierte, así como por las copias que acompañan á este pedimento sacadas del expediente respectivo que se halla archivado en la oficina de su cargo, que efectivamente desamortizó

D. José Antonio Abrego la casa núm. 28 de la calle del 5 de Mayo de Orizaba, comprándola en remate público á reconocer su importe conforme á las disposiciones de la ley de 25 de Junio de 1856 y posteriormente lo fué enagenado su valor con arreglo á las de 12 y 13 de Julio de 1859 por haber perdido su derecho D. Felipe de Jesus Galicia que fué el capellan que representaba un capital que estaba reconocido en la expresa finca y en otras que tambien fueron expropiadas con arreglo á dichas leyes: que establecidas en Orizaba las autoridades emanadas del gobierno intruso, aprovechando esa circunstancia que creyó favorable para su intento el Sr. Galicia, puso demanda contra el Sr. Abrego en reclamacion de la parte de capital de su capellanía que reconocia la casa indicada, y seguidos los trámites de un juicio ejecutivo fué embargada y sentenciada de remate, vendiéndose en almoneda pública á D. Manuel Carrillo Tablas, cuya sentencia fué revocada en el tribunal superior de Puebla, aunque no aparece que hubiese tenido cumplimiento, tal vez por las circunstancias de la guerra que sobrevinieron en aquellos dias; pero restablecido que fué el órden constitucional y expedida la ley general de 20 de Agosto de 1867, el Sr. Abrego, usando de su derecho como legítimo dueño y poseedor de la casa en cuestion, intentó su accion de nulidad del juicio anteriormente referido, obteniendo la sentencia favorable que se halla acumulada en copia á fojas 2 de este expediente, por la que se le mandó reponer en la posesion que antes habia disfrutado con otros derechos que se le han reservado.

Sabedor el rematador de la finca de que se habia pronunciado aquella sentencia y que se habia ejecutado, se presentó apelando de ella y de este recurso que le fué concedido se han originado las dos instancias superiores de que hacen mérito los quejosos alegando y con razon que las respectivas salas de 2ª y 3ª instancia con infrac-

ción de la ley general ya citada y consiguientemente de los artículos constitucionales que protegen las garantías de posesión y propiedad de los bienes del hombre dando efecto retroactivo al código del Estado declararon en sus fallos que era válida la almoneda pública que se originó de la sentencia de remate, puesto que revocaron la de 1ª instancia en cuanto afectaba los derechos que como rematador había adquirido el Sr. Carrillo Tablas, de modo que dichas salas dejaron incumplidas las disposiciones de las fracciones 1ª y 2ª del art. 4º de la citada ley que quiso los procedimientos judiciales que tuvieran lugar en el tiempo del gobierno anticonstitucional, aunque hubiesen sido con el pleno consentimiento de las partes fuesen, nulos y de ningún valor, y de aquí viene el derecho que ahora están deduciendo los herederos del Sr. Abrego para que no se les despoje de la posesión legítima que han adquirido de su difunto padre.

Por tales razones, es de parecer que se acceda á la solicitud de los quejosos y así lo pide al juzgado por ser de justicia.

Heroica Veracruz, Octubre veintitres de mil ochocientos setenta y uno.—*Miguel Arechavaleta*.—Una rúbrica.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Heroica Veracruz, Diciembre seis de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo y protección promovido por el representante de los herederos de D. José Antonio Abrego de Orizaba contra las providencias dictadas por el juzgado de 1ª instancia de aquel Canton relativas á ejecutar la sentencia de 3ª instancia del II. tribunal superior de justicia del Estado pronunciada en un juicio que promovió el mismo Abrego contra D. Felipe de J. Galicia de Puebla de Zaragoza, sobre nulidad de otro ejecutivo que este último siguió contra aquel en cobro de una

capellanía de tres mil pesos ante el juez imperialista de aquella localidad, fundando su ocurno en que con dichas providencias emanadas de la sentencia ejecutoriada de la superioridad se les violaban las garantías que les acuerdan los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución federal y que por lo mismo el caso estaba comprendido en la fracción 1ª, art. 1º de la ley orgánica y de procedimientos de 20 de Enero de 1869; la copia certificada por el C. secretario de la H. sala de 3ª instancia, de las sentencias pronunciadas en las tres instancias que tuvo el juicio sobre la indicada nulidad que acompañó la parte quejosa á su ocurno; la providencia de 8 de Setiembre dictada á pedimento de la misma parte en que se mandó suspender todo procedimiento ó sean los actos reclamados de conformidad con lo prevenido en la parte 2ª del art. 5º de dicha ley; el informe que con la debida justificación produjo el juzgado de 1ª instancia de Orizaba y el pedimento fiscal presentado por el C. jefe superior de hacienda como sustituto del C. promotor y por impedimento de este y todo lo demas que de autos consta.

Considerando: que está justificado con los documentos acumulados en este juicio, que D. José Antonio Abrego compró al supremo gobierno, como perteneciente á bienes nacionalizados la casa núm. 28 ubicada en la 4ª calle de las Damas de Orizaba en el precio de tres mil trescientos treinta y tres pesos treinta y tres centavos en Octubre de 1860 y con arreglo á las leyes de 12 y 13 de Julio de 1859, llamadas de Reforma sin haber reconocido ningún capital á favor de la expresada capellanía, sino que pagó al erario federal el precio total de ella en los términos y plazos acordados por el ejecutivo del Estado autorizado por la suprema resolución de 10 de Setiembre de 1859, según aparece de la copia certificada de fojas 22: que durante el gobierno del llamado imperio, D. José de J. Galicia creyendo favorables á su intención las cir-

cunstances anormales en que se encontraba la República en aquella época, y favorecido del trastorno público estableció demanda en Orizaba contra D. José Antonio Abrego para que le pagara la referida capellanía á cuya responsabilidad creyó afectada la casa núm. 28 de la cuestion, obteniendo sentencia favorable que despojó al propietario de su finca vendiéndosela el juzgado en pública almoneda á D. Manuel Carrillo Tablas, con cuyo precio se pagó al llamado acreedor, conociendo de este juicio el tribunal superior de aquel tiempo, revocando en 2ª instancia la sentencia de remate: que dicho fallo no pudo cumplimentarse por circunstancias excepcionales que sobrevinieron, quedando ejecutoriado el del inferior sin dejar por eso de ser atendible en favor de los quejosos aquella circunstancia, porque revela que no era justo este último en concepto de la superioridad.

Que restablecido el orden constitucional y en virtud de los derechos que al Sr. Abrego concede la ley general de 20 de Agosto de 1867, estableció demanda sobre nulidad del ante dicho juicio ejecutivo, por estar comprendido en las fracciones primera y segunda de su artículo cuarto contra D. Felipe de J. Galicia, y obtenida sentencia favorable que quedó ejecutoriada por la aquiescencia de éste, se puso en posesion de la casa al Sr. Abrego, concediéndosele otros derechos sobre arrendamientos que se expresan en el fallo; que D. Manuel Carrillo Tablas como perjudicado, apeló de aquella resolucion y pasados los autos á la H. sala de segunda instancia, y con fundamento de la famosa ley primera título primero libro 1.º de la N. R. relativa á los contratos que se celebran entre particulares, y art. 1652 del código de procedimientos del Estado, la revocó en cuanto afecta los derechos adquiridos por el apelante en la almoneda, cuando esta es una emanacion de la sentencia de remate que habia quedado firme por haberse hecho punto omiso de ella en la del superior, y cuando tambien no se citaba

ningun fundamento legal contra la ley general vigente en el caso; que dicho superior ha dado fuerza retroactiva al art. 1652 del código de procedimientos, supuesto que ese código es posterior al hecho que juzgaba, contra lo prevenido en la segunda parte del art. 14 de la constitucion federal; que pasado el negocio á 3ª instancia por el recurso de súplica fué confirmado el fallo de 2ª por el de 3ª, remitiéndose la ejecutoria al juzgado inferior para su cumplimiento, sin haberse variado ni adicionado los fundamentos en que descansa aquella; que por lo tanto y por no haberse arreglado dicho fallo á la citada ley general de 20 de Agosto de 1867, no puede considerarse fundado y motivado en causa legal el procedimiento del juzgado de primera instancia de Orizaba que vuelve á despojar á los herederos del Sr. Abrego de su casa y les exige los arrendamientos devengados, con violacion de garantías que les conceden los artículos 16 y 27 del código fundamental de la República.

Por cuyos fundamentos legales y atendiendo á lo prevenido en el art. 2º de la ley general de 15 de Octubre de 1868 fallando definitivamente, se declara: que la justicia federal ampara y protege á los herederos de D. José Antonio Abrego contra el procedimiento del juzgado de 1ª instancia de Orizaba, relativo á ejecutar la sentencia de 3ª instancia pronunciada en favor de D. Manuel Carrillo Tablas.

Notifíquese á las partes, publíquese por «el periódico Oficial» del Estado, sáquense las copias que la ley previene para el «Semanario Judicial», y elevénse los autos originales á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Lo mandó y firmó el C. juez de Distrito del Estado, *Luis J. Gomez*.—Una rúbrica. A. *José Mª Gonzalez*.—Una rúbrica. A. *Filomeno Rojas*.—Una rúbrica.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Veracruz, por el C. Vicente Simancas, apoderado de los herederos de D. José Antonio Abrego, contra el C. juez 2º de 1ª instancia de Orizaba, por las diligencias practicadas en ejecución de la sentencia de 3ª instancia pronunciada en un juicio promovido por el referido Abrego contra D. Felipe de Jesús Galicia, respecto de un capital de una capellanía que Galicia disfrutó; y

Considerando: que en las facultades de los tribunales federales no está la de mezclarse en los juicios que los individuos particulares sigan ante los tribunales de los Estados, que el mismo Abrego promovió el en que « dictó la sentencia de 3ª instancia contra las consecuencias de cuya ejecución se queja; y que en esa sentencia y la ejecución de ella no se atacan las garantías individuales contenidas en la Constitución federal, se decreta:

Que se revoca la sentencia pronunciada el 6 del actual por el juez de Distrito de Veracruz que concede el amparo; y se declara:

Que la justicia de la Unión no ampara ni protege á los herederos de D. José Antonio Abrego, contra el procedimiento del juzgado de 1ª instancia de Orizaba, relativo á ejecutar la sentencia pronunciada en favor de D. Manuel Carrillo Tablas; y lo acordado.

Devuélvanse las actuaciones con testimonio de este fallo, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro*

*Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*M. Auzá.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zuvala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Enero cinco de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

## CRIMINAL.

*Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Mazatlan contra los extranjeros armando Carlos Magne, Francisco Gandulfi Alejandro N., Esteban Casamayor y Juan B. Gareste, por los homicidios y robos cometidos en alta mar á bordo de la balandra nacional "Haydee" los días 5 y 8 de Mayo de 1865.*

### SENTENCIA DEL C. JUEZ DE 1ª INSTANCIA DE LO CRIMINAL.

Puerto de Mazatlan, Julio veintinueve de mil ochocientos sesenta y cinco.

Vista esta causa formada de oficio contra Armando Carlos Magne, soltero, de cuarenta y seis años de edad, natural de Vanes en Francia, de ejercicio marinero; Francisco Gandulfi de veintinueve años, soltero, natural de Pignerol en Italia, sin ejercicio conocido; Esteban Casamayor de cuarenta años, casado, teniente de la armada nacional, natural de Ario en España, y Juan Bautista Gareste, casado, de veintinueve años, natural de Genova, marinero de oficio, por los homicidios perpetrados en alta mar á bordo de la balandra nacional "Haydee" los días cinco y ocho de Mayo último.

Considerando: que por las propias confesiones de Magne se embarcaron á bordo de "Haydee" en clase de pasajeros en los momentos que hacia vela rumbo á la Paz; que su intencion al tomar pasage, fué de apoderarse del lugar referido, como lo ha-